

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

4 de octubre de 2010
Índice AI: MDE 12/031/2010

Amenaza de desalojo forzoso de los habitantes de “viviendas precarias” en el Gran Cairo

Amnistía Internacional, el Centro Egipcio del Derecho a la Vivienda y la Coalición Internacional para el Hábitat –Red para el Derecho a la Vivienda y a la Tierra– han anunciado hoy, con motivo del Día Mundial del Hábitat, que la semana pasada enviaron una carta conjunta al primer ministro de Egipto para instar al gobierno de este país a impedir el desalojo forzoso de los habitantes de los asentamientos informales del Gran Cairo, oficialmente calificados de “zonas de viviendas precarias”.

Las tres organizaciones hacen este llamamiento cuando los residentes de las 33 “zonas de viviendas precarias” en El Cairo y en las inmediaciones de Giza se enfrentan al posible desalojo de sus hogares y su reasentamiento en la Ciudad 6 de Octubre y la Ciudad 15 de mayo, en las afueras de Giza y El Cairo, respectivamente, donde les serían asignadas unas 35.700 viviendas. En mayo de 2010, el primer ministro egipcio, Ahmed Nazif, anunció que las zonas que habitan actualmente serán despejadas con fines de reordenación urbanística como parte de la Visión Estratégica 2050 para el Gran Cairo. Los residentes no han sido debidamente consultados sobre la decisión de desalojarlos a la fuerza y reasentarlos en otra ciudad.

Las tres organizaciones, que hacen campaña contra el desalojo forzoso y en favor de la realización del derecho a una vivienda adecuada, explicaron al primer ministro que el plan de las autoridades egipcias aparentemente carece de las debidas salvaguardias contra el desalojo forzoso ya que no prevé un proceso previo de consulta adecuado y completo con los residentes afectados en relación con posibles alternativas a su desalojo y condiciones de reasentamiento.

En particular, si se acuerda un plan de desalojo, se debe informar a los residentes de la fecha prevista para su ejecución y de las condiciones de reasentamiento con la antelación suficiente para que tengan posibilidad de recurrir tales decisiones ante un tribunal independiente. Además, las fuerzas policiales y de seguridad egipcias deben garantizar que no hacen uso excesivo de la fuerza al efectuar los desalojos, y las autoridades tomarán medidas para que ninguna persona quede sin hogar como consecuencia del desalojo.

Uno de los asentamientos informales en peligro es Ramlet Bulaq (Maspiro), situado en el centro de El Cairo a la sombra de torres empresariales y edificios oficiales que miran al Nilo. El Plan Cairo 2050 para el “desarrollo” de la ciudad considera que esta zona sólo es apropiada para fines turísticos y para la edificación de sedes empresariales y administrativas con vistas al Nilo y a grandes extensiones ajardinadas. No da futura cabida a sus habitantes actuales, familias que han residido allí durante generaciones, pero a quienes las autoridades tienen previsto expulsar de la zona y reasentar en nuevas ciudades situadas a muchos kilómetros, en las afueras del Gran Cairo.

Ezbet Abu Qarn, en El Cairo Antiguo, es otro asentamiento informal en el que muchos residentes se dedican al reciclaje de residuos sólidos. También ha sido calificada de “zona de viviendas precarias” y, con arreglo al Plan 2050, se exigirá a sus habitantes que abandonen el antiguo corazón de El Cairo, donde se ubican las iglesias y mezquitas más antiguas del complejo plurirreligioso. Los residentes de la zona no desean marcharse sino mejorar sus condiciones de alojamiento, pero temen que el desalojo forzoso sea inevitable.

En general, los habitantes de los asentamientos informales prefieren quedarse donde están ahora, más cerca de la ciudad, y temen que su reasentamiento en nuevos centros urbanos distantes de

sus lugares de trabajo afecte gravemente a su capacidad de mantener su nivel de vida actual y altere gravemente o destruya las relaciones sociales que tienen establecidas.

Amnistía Internacional, el Centro Egipcio del Derecho a la Vivienda y la Coalición Internacional para el Hábitat –Red para el Derecho a la Vivienda y a la Tierra– consideran que los habitantes de todo asentamiento informal tienen derecho a participar activamente en el desarrollo y la implementación de planes que afectan de manera tan directa a su vida. La participación activa es la base de cualquier solución justa e imparcial para hacer realidad el derecho a una vivienda adecuada de las personas afectadas.

Según el Centro para la Mejora de Asentamientos Informales, órgano establecido en virtud de la autoridad del gabinete del primer ministro egipcio, se proporcionarán programas de apoyo socioeconómico a los residentes de las 33 “zonas de viviendas precarias” que van a ser reasentados, como formación para encontrar empleo (especialmente para jóvenes), servicios de salud para mujeres, clases de alfabetización para amas de casa y tarjetas de identidad. Esto representa un avance importante, pero es posible que no sea suficiente para abordar todas sus necesidades, y esto debe ser objeto de debate previo como parte del proceso de consulta.

Desde que tuvo lugar el mortal desprendimiento de rocas de Al Duwayqa en septiembre de 2008, que causó la muerte de al menos 119 personas en el asentamiento informal de Manshiyet Nasser, en el este de El Cairo, el Centro para la Mejora de Asentamientos Informales ha clasificado los asentamientos informales de Egipto con arreglo a su evaluación del grado de peligro al que se enfrentan los residentes locales, ya sea por desprendimiento de rocas u otras amenazas para su vida y su salud. En El Cairo se identificaron 16 zonas que entrañaban peligro inminente de muerte para sus habitantes; son principalmente asentamientos informales en otras zonas de Manshiyet Nasser y El Cairo Antiguo. El Centro para la Mejora de Asentamientos Informales considera que las “zonas de viviendas precarias” constituyen una segunda categoría de asentamiento informal calificada de “insegura”, porque se han edificado con materiales precarios y, por tanto, se considera que no ofrecen refugio adecuado a sus ocupantes.

Los desalojos forzosos llevados a cabo por las autoridades egipcias hasta el momento, documentados por las tres organizaciones, contraviene las obligaciones contraídas por Egipto en virtud del derecho internacional, en particular la Observación general número 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1997.

En los últimos dos años, las autoridades egipcias han efectuado desalojos sin consultar a los residentes sobre las condiciones de reasentamiento y sin dar notificación previa con suficiente antelación. Muchas familias se han quedado sin hogar tras la demolición de sus viviendas, como consecuencia de recuentos imprecisos carentes de todo proceso y criterio de trabajo. Algunos han permanecido varios meses sin hogar hasta que los han realojado en viviendas alternativas. Las mujeres son discriminadas en la asignación de vivienda ya que, en ausencia del cónyuge, normalmente no se considera que constituyan una unidad familiar aparte de sus progenitores.

Desde que tuvo lugar el mortal desprendimiento de rocas en 2008, la gobernación de El Cairo afirma que ha reasentado a unas 9.100 familias de Manshiyet Nasser en viviendas alternativas en las proximidades de Nueva Al Duwayqa y en la ciudad de Al Nahda, al norte de El Cairo. Unas 2.000 familias de los asentamientos informales de Establ Antar y Ezbet Khayrallah, en El Cairo Antiguo, fueron reasentadas en viviendas alternativas en Ciudad 6 de Octubre. No les facilitaron documentación que les garantizara seguridad de tenencia y protección frente a futuros desalojos.

Amnistía Internacional, el Centro Egipcio del Derecho a la Vivienda y la Coalición Internacional para el Hábitat –Red para el Derecho a la Vivienda y a la Tierra– piden al gobierno de Egipto que acate las normas existentes de derechos humanos relativas a la vivienda adecuada para evitar causar más dificultades a quienes residen en “viviendas precarias” en El Cairo, y posibilitar el éxito final de los planes y proyectos de desarrollo social y económico.